

Inmigración: un hecho social, total y de clase

STEFANO GALIENI

Responsable del Departamento de Inmigración del Partido de la Refundación Comunista / Izquierda Europea (Italia)

RESUMEN: Existe una diferencia estructural entre cómo se narran en Italia y en Europa los cambios provocados por la nueva composición social que ha traído consigo el aumento de la inmigración. Escuchando a los comentaristas políticos, a veces incluso a los que tienen una visión aparentemente progresista, parece percibirse el asombro ante un acontecimiento inesperado, como una catástrofe natural, y los patéticos intentos de gobernar la que consideran una emergencia destinada a terminar, tarde o temprano. La historia real de Italia, sus leyes a la vez coercitivas y fuertemente impregnadas de utilitarismo útil a los negocios y a la explotación muestran lo contrario. Como queda profundamente expuesto en el Mediterráneo, Italia, incluso con gobiernos de diferente color, sigue produciendo los mismos fallos: expulsiones forzosas, transformación de las personas en clandestinos, criminalización de la solidaridad, exclusión social y realización de una jerarquía de personas basada en su utilidad, color de piel, sexo, edad y funcionalidad en un sistema que entretanto ha dejado de funcionar, que ha fracasado dramáticamente como todo proyecto neoliberal.

Sin embargo, a pesar de los muchos obstáculos, de la lógica imperante del Schivo expiatorio sobre el que canalizar cada error de las políticas económicas de medio siglo hasta la fecha, está creciendo un contexto de nuevos ciudadanos, incluso en Italia, con grandes ambiciones y que se lanzan a un conflicto de clases que les pertenece, pero que también implica y concierne a cada nativo



explotado. ¿A qué esperamos para captar los signos de revuelta y de profundo cambio cultural que se están produciendo, en un país en pleno invierno demográfico, para invertir el rumbo? Los signos de recomposición de clase están llegando, depende de nosotros, de una izquierda decolonial capaz de salir de un eurocentrismo estéril y residual, asumir el reto y redescubrir, juntos, antiguos y nuevos lazos de solidaridad para cambiar radicalmente el sistema.

El punto de partida es un enfoque sociológico. Decir «inmigración», sin entender los infinitos aspectos con los que impacta en una sociedad, es inútil. Es necesario considerar este proceso como un hecho social total, que modifica todos los aspectos de las relaciones, que tiene impactos positivos, pero también provoca cuestiones críticas. Los aspectos éticos, solidarios e inclusivos son necesarios, pero contemplándolos en una nueva composición de clase que representa el presente y no el futuro de cualquier agregación. Algunas narrativas históricamente falsas deben ser desmentidas. Italia siempre ha vivido la llegada de inmigrantes como una cuestión de emergencia, destinada a terminar como un terremoto o una inundación; la política, la cultura y el mundo sindical —con algunas loables excepciones— han aceptado este principio, que luego han pagado tanto los que llegaban como los que veían cambiar el país. Entonces prevaleció la narrativa de que «Italia aún no estaba preparada para ser un país de inmigración». De ahí la pretensión, puesta en práctica con una legislación a menudo aproximativa o en la que se privilegiaba el sesgo represivo, de que se podía/debía «gobernarla».

Un ejemplo concreto: en Italia se sigue gestionando la entrada regular a través de un instrumento fallido como es el Decreto de Flujos. Cada año, en función de las necesidades de las empresas, se propone a los países que han firmado acuerdos bilaterales con Italia para las repatriaciones que dejen entrar una cuota preestablecida de personas, principalmente como mano de obra estacional, sujeta a posibles nuevos contratos, con el fin de satisfacer las necesidades de las empresas. Se trata de una versión utilitarista que no tiene en cuenta las miles de razones inherentes a los proyectos migratorios y que tiene en su base una concepción colonial y supremacista. Los migrantes son considerados como objetos encerrados en una tubería, que se puede abrir y cerrar según dictados predeterminados, pero cuyo grifo no funciona.

No es casualidad que al menos desde 2011 (la llamada *emergencia norteafricana*) —o incluso mucho antes, pero por otros motivos—, la entrada en Italia se produzca de forma «irregular», sin documentos, a través, cuando va bien, de redes de amigos o familiares, cuando va mal y sobre todo en la migración forzada, a través de traficantes, creando año tras año condiciones de invisibilidad en el territorio, de precariedad, de chantaje, de las que a menudo es imposible escapar. En resumen, se ha legislado, empezando por la Ley 40 «Turco Napolitano» de 1998, que luego se convirtió en un texto único y se hizo más chantajista con las enmiendas introducidas por la llamada ley «Bossi-Fini»



de 2002, en la que se sancionaba que la presencia en el territorio nacional solo se permitía —con la excepción de los entonces menos presentes solicitantes de asilo— si se estaba en posesión de un contrato de trabajo. Se introdujo el llamado *contrato de estancia*, que convertía la posibilidad de permanecer en Italia en una prerrogativa a merced de la buena voluntad de quien garantizaba el empleo, en un país donde reinaba la economía sumergida. En aquellos años, paradójicamente, mientras a los nativos se les pedían contratos de duración limitada y se alababa la flexibilidad, a los que inmigraban se les pedía un empleo indefinido para garantizarles dos años de permiso.

Este es el resultado de unas políticas que no solo eran erróneas y se demostraron, en la misma lógica de mercado de la relación entre oferta y demanda, fracasadas, sino también de un retraso estrepitoso del que todavía no hemos tomado conciencia. No es cierto hoy, ni lo era cuando se introdujeron estas normativas, que la inmigración fuera un fenómeno nuevo para Italia. Ya en los años cincuenta y sesenta, la inmigración femenina llegó para sustituir a las mujeres italianas en los trabajos de cuidados, gracias a que cada vez más mujeres encontraban empleo; a principios de los ochenta, gran parte del mundo laboral, compuesto principalmente por mujeres italianas, fue sustituido por hombres procedentes de Europa del Este y del continente africano. Incluso antes de la llegada de los dos éxodos procedentes de Albania, en 1991, tras la caída del régimen, y en 1997, tras una catástrofe financiera, los astilleros italianos empezaban a poblarse de personas procedentes de Rumanía, Bulgaria, Polonia, mientras que otros nichos económicos necesitados de mano de obra barata eran ocupados por personas procedentes de América Latina, Asia, África. No producir un sistema legislativo inclusivo ha generado todo tipo de daños y ha contribuido al crecimiento de una cultura de rechazo hacia la diversidad y la pluralidad social que ha alimentado las peores regurgitaciones xenófobas.

De otro modo, sería imposible entender como un país que había sido hasta el *boom* económico de los años sesenta, un país de emigración, consiguió transformarse hasta el punto de despejar el racismo, la violencia, la explotación y la exclusión social. Y de nuevo, para terminar el necesario excurso histórico: cuando tras la crisis de 2008 disminuyeron drásticamente las llegadas a Italia de personas que buscaban un proyecto de vida mejor y aumentaron las migraciones forzadas, ligadas a conflictos, de los que a menudo hemos sido promotores, el escenario empeoró aún más. A excepción de algunas buenas prácticas, como las llevadas a cabo en Riace o la acogida generalizada de algunos miles de personas, el «País Bello» (como gusta de llamarse Italia) ha reaccionado convirtiendo en un miserable negocio el hecho de que cientos de personas estuvieran y estén encerradas en espacios reducidos, privatizando la gestión de los centros dedicados a este fin y garantizando beneficios al organismo gestor. La narrativa mediática enfatizaba el hecho de que cada inmigrante costaba 35 euros al día,



ocultando que quienes vivían en aquellos infiernos apenas disponían de cama, ducha, dos comidas y recibían 2,5 euros diarios durante lo que se denominaba *acogida*. La misma narrativa construyó el imaginario de seguridad según el cual los lugares en torno a los cuales se situaban estos centros se volvían peligrosos, se depreciaban, constituían una degradación y un atentado a la seguridad, a menudo por una sola razón: los que esperaban sus papeles no podían hacer otra cosa que pasear, llevando la mancha de un color de piel no aceptado. En realidad, los integrantes del país solidario hicieron otra cosa. Han intentado entablar relaciones con los que llegaban, proporcionar herramientas, empezando por la enseñanza, a menudo informal, del italiano, para que quienes habían sufrido traumas indecibles para llegar a nuestras opulentas ciudades se sintieran menos extranjeros. Se trata de un tejido precioso que sigue muy presente en el país, aunque no solo poco apoyado sino abiertamente criminalizado por muchos empresarios políticos del miedo que han encontrado en el migrante, en el solicitante de asilo, el chivo expiatorio perfecto para justificar los fracasos de sus propias políticas económicas y sociales.



Pero el mundo antirracista, considerando su acción como política, no se limitó a protestar por ejemplo contra la infamia de los centros de internamiento, que llamamos, aunque las siglas cambien a menudo, Centros Permanentes para la Repatriación —o contra los intentos de detener a los que llegan de las costas norteafricanas, rescatados quizás por barcos humanitarios europeos—, sino que intentó elaborar también su propia visión de la política exterior, identificando por ejemplo a regímenes como el turco, el libio y el tunecino como los peores cómplices de semejante nefandad. Pequeños pasos adelante para hacer comprender las razones que han llevado a Europa a convertirse en una fortaleza y al Mediterráneo en una fosa común en la que, según datos estadísticos, yacen entre 30 000 y 60 000 muertos, en una guerra tan silenciosa como invisible y asimétrica contra quienes tuvieron la desgracia de nacer en el lado equivocado del mundo. Pero si volvemos a la definición de la inmigración como un hecho social total, esta es solo la clásica punta del iceberg de un complejo de cambios mucho más profundos, con implicaciones positivas, que se estaban produciendo en un país entretanto.

En medio siglo, millones de personas han llegado a Italia. Un pequeño número ha obtenido laboriosamente la ciudadanía, debido a que, según la ley actual (91/1992), que se someterá a referéndum a finales de la primavera, se requieren al menos 10 años de residencia continua y regular, con ingresos y residencia demostrados, para solicitar simplemente la ciudadanía italiana (quedan al menos otros 4 años de trámites burocráticos). A pesar de ello, hoy en día hay unos 5,3 millones de ciudadanos de origen extranjero, presentes regularmente, que cambian lenta pero constantemente la estructura social del país. Y aquí llegamos a la Italia del 2025, extremadamente diferente de la representada en los medios de comunicación o en las instituciones que la gobiernan. Se

calcula que alrededor de medio millón son los que hoy están presentes, pero sin papeles. Es un país agobiado por el invierno demográfico —la edad media ronda los 48 años— y la brecha numérica entre los que pueden trabajar y los que están jubilados es cada vez menor. Si no se interrumpe este camino, pronto lo poco que queda, en términos de servicios sociales y sanitarios, no tendrá recursos, mientras que se aplicarán nuevos y severos recortes a la educación, la vivienda pública y la habitabilidad. Inevitables serán el aumento de la edad de jubilación y la reducción del ya escaso poder adquisitivo de los salarios.

La presencia inmigrante aporta el 8,8% del PIB global y picos de casi el 15% en la agricultura y la construcción. Pero el espacio económico vital, a pesar de que los salarios siguen siendo firmemente inferiores a los de los «italianos», sigue creciendo. Ya no hacen los trabajos que los «italianos no quieren hacer», sino los que «ya no están en condiciones de hacer». Han entrado en el mercado laboral jóvenes, a menudo también nativos digitales, que intentan hacer frente a la limitación del mercado laboral con sus propios proyectos, incluso autónomos. No es casualidad que, mientras el trabajo autónomo y la apertura de empresas está en declive, incluso antes de la pandemia, entre los italianos, siga un aumento entre los que vienen de otro país, aunque a menudo sea en forma de empresas con un solo empleado, ellos mismos. También es interesante observar que la tasa de sindicalización es más elevada entre los trabajadores de origen extranjero —sobre todo en determinados sectores como la agricultura, la siderurgia, la construcción naval y la logística— que entre los italianos. Sin embargo, el sindicato no siempre ofrece esa «ciudadanía social» negada en términos políticos. Es mucho más difícil desarrollar formas de agregación sindical capaces de abrir conflictos, en ámbitos como la restauración o los cuidados, donde el aislamiento impide la formación de lazos de solidaridad entre los trabajadores. Allí donde se ha producido la sindicalización, se han producido formas de conflicto de clase sumamente interesantes, que también han roto las limitaciones y barreras del origen nacional y que, en algunos casos, han visto codo con codo mano de obra nativa y migrante. Podría tratarse del embrión de una alianza de clases redescubierta que responde a la vieja consigna «proletarios de todo el mundo, uníos», en un mercado laboral que no se parece ni remotamente al del siglo XIX. Junto a estas nuevas perspectivas, a menudo en los mismos lugares, se intenta reimplantar nuevas formas de esclavitud 4.0 a través de un corporativismo generalizado, no solo en la agricultura y la construcción, sino incluso en las empresas informáticas.

La contratación de mano de obra, junto con la circulación de mercancías, produce, en algunos sectores, mayores beneficios que la producción de las propias mercancías y su venta en el mercado. Junto a los elementos economicistas, sin embargo, se han producido cambios socioculturales no menos valiosos. A las migraciones masculinas de los últimos treinta años han seguido, con dificultades, las reagrupaciones familiares y luego la realización



de identidades híbridas como las que, con un término inadecuado, llamamos *segundas* o *terceras generaciones*. Están en las escuelas y, cuando lo consiguen, superando las dificultades de clase, de género y de origen migratorio, incluso acceden a la universidad, tratando de abordar esa redención social, ahora interrumpida, que la sociedad italiana vivió en la época del *boom*. Son jóvenes, a menudo mujeres, con frecuencia racializadas, que no aceptan permanecer en condiciones de subordinación y que, sobre todo, no ven la vida en Italia como único desarrollo posible. Perciben, como las nuevas generaciones italianas, la ausencia de toda perspectiva de crecimiento, de toda visión de futuro y ya imaginan o practican su proyecto de vida en otro lugar. Aquí surge una reflexión sustancial, teórica pero también empírica, que en mi opinión cuestiona a la izquierda en Italia. Durante el periodo en que prevaleció el modelo social-liberal —que sigue teniendo éxito— hubo en la izquierda moderada un cálculo miope y cortoplacista, basado en la cooptación de quienes podían encontrar espacio en tal idea del mundo y en el reparto de enfoques paternalistas o con visiones de seguridad hacia quienes podían considerarse poco interesantes para el magnífico destino de un mercado que haría a todos más libres. El sueño se ha hecho añicos, con las crisis repetidas, con el fracaso de las leyes basadas únicamente en el beneficio, con la pandemia primero y con las guerras estructurales hoy.

Para esta perspectiva no hay futuro, solo se trata, para quienes han sido responsables de ella, de hacer autocrítica y revisar radicalmente las opciones tomadas, no solo en materia de inmigración. Pero a la izquierda real, la izquierda comunista y antirracista, le ha costado comprender la existencia de un terreno que se aleja de las simples declaraciones éticas y solidarias. Hemos tardado décadas en darnos cuenta de que vivimos en una sociedad nueva, plural en cuanto a culturas de origen, relación con el mundo y concepciones diferentes de principios que no son propiedad intangible nuestra, como la democracia y los derechos, pero que pueden declinarse de maneras diferentes y a menudo menos cristalizadas. Así nos los muestran movimientos sociales de África, Oriente Medio, América Latina y más allá, que intentan proponer nuevas soluciones a un contexto en el que mercado y democracia ya no son compatibles. Con un enorme retraso, se ha iniciado un proceso de descolonización cultural y política de la izquierda en Europa, fruto también de las diásporas que han elegido vivir en este continente o se ven obligadas a hacerlo, y que están emergiendo con sus reivindicaciones. Al final y en la comprensión de una complejidad que no puede reducirse a un análisis binario —el multipolarismo neoliberal existe y hay que asumirlo—, hay que elegir entre una izquierda conservadora, cuyos límites y potencialidades se vislumbran, que lo remonta todo al papel de ser mano de obra unida por una pertenencia nacional, o desandar el camino de un internacionalismo proletario, representado también en carne y hueso por las historias de las personas con las que nos encontramos a diario y con



las que a menudo nos manifestamos, pensamos en la causa palestina o kurda, no como simple solidaridad, sino como partícipes de principios en los que nos reconocemos como iguales.

Descolonizar nuestra forma de pensar y de actuar es el único antídoto viable contra el sistema que crea continuamente enemigos internos que hay que reprimir, comportamientos que hay que rechazar, sabores, olores, cultos, que hay que considerar, como tales, portadores de disvalores. Si en el imaginario de los gobiernos de la vieja/nueva derecha reaparece con fuerza la idea de un supremacismo excluyente y misógino, si reaparecen fantasmas como el de la tradición nacional, si hay quien, desde una bancada ministerial, teme el riesgo de que un ficticio plan de «sustitución étnica» gane consenso al afirmar que «hay que deshacerse de muchos inmigrantes y reiniciar la natalidad italiana», entonces hay que dar respuestas a la altura de las circunstancias. La protesta, la defensa de las vulnerabilidades, los llamamientos a que «sigamos siendo humanos» no son suficientes. Hay que construir una idea plural de una nueva sociedad que contenga las raíces de los principios socialistas y no se atrinche- re en los confines del eurocentrismo. Ese periodo de dominación blanca que comenzó en 1942 ha terminado; hoy hay que reconstruir un mundo libre de la lógica de la dominación. A menudo en la historia de la humanidad, el arte, la cultura, la música, los modos de expresión captan anticipadamente los tiempos que se avecinan. Algo está cambiando. ★

